



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA: INCIDENTE DE DESACATO – CONSULTA
ACCIONANTE: HERNANDO URIBE MARULANDA
ACCIONADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL DE VÍCTIMAS – UARIV
RADICADO: 05001 – 31 – 05 – 023 – 2021 – 00395 – 05
ACTA N° 036

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por las magistradas **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**, **LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE** y **MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, procede a decidir de plano mediante el presente proveído el grado jurisdiccional de consulta surgido con ocasión de la decisión adoptada en el incidente de desacato incoado por el señor **HERNANDO URIBE MARULANDA** en contra de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS - UARIV**.

A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 036** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES FÁCTICOS

El señor **HERNANDO URIBE MARULANDA** interpuso acción de tutela en contra de la UARIV, por considerar que se le estaban vulnerando sus derechos fundamentales. El trámite tutelar concluyó con sentencia de segunda instancia en la cual se **revocó** la de primera, y se **concedió** el amparo, en consecuencia, de ello se ordenó a la accionada¹:

“PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada por la **Juez Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín** el **22 de octubre de 2021**, para en su lugar, **TUTELAR** los derechos

¹ Segunda Instancia / C03Desacato / 01PrimeraInstancia - Archivo PDF **003**

RADICADO 05001 31 05 023 2021 00395 - 05

fundamentales al debido proceso administrativo, igualdad, dignidad humana y al reconocimiento del señor HERNANDO URIBE MARULANDA como víctima del conflicto armado interno.

SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas–UARIV - **DEJAR SIN EFECTOS**, a partir de la fecha de esta sentencia, **el Acta Extraordinaria No. 002 del 12 de febrero de 2010**, en las **Resoluciones No. 275714 DEL 4 de octubre de 2013 y 20213607 del 5 de mayo de 2021** mediante las cuales decidió no incluir a HERNANDO URIBE MARULANDA con c.c. 3.555.571 en el Registro Único de Víctimas–RUV–.

TERCERO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas –UARIV–que, en el término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de este fallo, incluya en el Registro Único de Víctimas–RUV–a HERNANDO URIBE MARULANDA con c.c. 3.555.571 por el hecho victimizante del **homicidio** de su **hijo JAIRO ANTONIO URIBE MARULANDA**.

CUARTO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas–UARIV–efectuar el **reconocimiento y pago de la reparación administrativa** a la que tiene derecho el padre de JAIRO ANTONIO URIBE MARULANDA **dentro del primer semestre del año 2022**, de conformidad con el análisis efectuado en la parte motiva de esta providencia."

El señor **HERNANDO URIBE MARULANDA** radica nuevamente solicitud para dar cumplimiento a la orden judicial el **28 de abril de 2023** indicando que la accionada no ha cumplido con la orden de tutela².

Se advierte, que ya se han impetrado dos incidentes de desacato por el accionante en contra de la accionada por no cumplimiento de la orden judicial, los cuales han terminado con providencia sancionando a los responsables, que fueron revisadas en consulta, profiriéndose decisiones en esta instancia confirmando la sanción impuesta, según decisiones emitidas el 10 de octubre de 2022³ y el 17 de febrero de 2023⁴.

2. CONSIDERACIONES

Pues bien, para efectuar el análisis debe la Sala partir de una premisa: es claro que el incidente de desacato es un mecanismo de coerción con el que cuentan los jueces en desarrollo de sus poderes disciplinarios, por ello está amparado por los principios del derecho sancionador, otorgándosele garantías al disciplinado. De esta manera, en el desarrollo del desacato siempre será necesario demostrar la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela, siendo claro que el solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la sanción, porque es

² Segunda Instancia / C03Desacato / 01PrimeraInstancia - Archivo PDF **002**

³ Segunda Instancia / C01Desacato / 02SegundaInstancia - Archivo **"05"**

⁴ Segunda Instancia / C02Desacato / 02SegundaInstancia - Archivo **"04"**

necesario que se pruebe la negligencia o el dolo de la persona que debe cumplir la sentencia de tutela.

Así mismo, la Corte Constitucional en sentencia **C-367 de 2014**, indicó que las autoridades judiciales que deciden un incidente de desacato, deben verificar una serie de requisitos, así:

"(...)" **4.3.4.8.** El trámite de cumplimiento sigue el procedimiento previsto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, que otorga amplios poderes al juez de tutela para hacer cumplir la sentencia, valga decir, para garantizar el cumplimiento material y objetivo de la orden de protección de los derechos amparados. Hay tres etapas posibles en el procedimiento para cumplir con el fallo de tutela: (i) una vez dictado, el fallo debe cumplirse sin demora por la persona a la que le corresponda; (ii) si esta persona no lo cumple dentro de las 48 horas siguientes, el juez se debe dirigir al superior de esta persona para que haga cumplir el fallo y abra un proceso disciplinario contra ella; (iii) si no se cumple el fallo dentro de las 48 horas siguientes, el juez "ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiera procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo".

4.3.4.9. De no cumplirse el fallo, entre otras consecuencias, la persona puede ser objeto del poder jurisdiccional disciplinario, que se concreta en el incidente de desacato. Este incidente sigue un procedimiento de cuatro etapas, a saber: (i) comunicar a la persona incumplida la apertura del incidente del desacato, para que pueda dar cuenta de la razón por la cual no ha cumplido y presente sus argumentos de defensa; (ii) practicar las pruebas solicitadas que sean conducentes y pertinentes para la decisión; (iii) notificar la providencia que resuelva el incidente; y (iv) en caso de haber lugar a ello, remitir el expediente en consulta al superior. Para imponer la sanción se debe demostrar la responsabilidad subjetiva del sancionado en el incumplimiento del fallo, valga decir, que éste es atribuible, en virtud de un vínculo de causalidad, a su culpa o dolo" (...)"

Dado lo anterior, esta corporación procede a verificar el trámite incidental dado por el Juez de instancia, encontrando **agotado el respectivo procedimiento**, así:

- Mediante auto del **12 de abril de 2023**⁵ el A Quo indicó que si bien el accionante radica una solicitud de "acción de cumplimiento" establecida en el art. 87 de la Constitución Nacional, este no sería procedente para las órdenes judiciales y que según el art. 3º de la ley 393 de 1997 tampoco sería competente para conocer de ese tipo de acción; sin embargo, para garantizar los derechos fundamentales del señor HERNANDO URIBE MARULANDA tramita aquella solicitud como **incidente de desacato** por ser el medio idóneo para solicitar el cumplimiento de orden judicial. Para dar trámite a esa solicitud, dispuso **requerir** a la Dra. **CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES** en su calidad de Directora de Reparación de la UNIDAD

⁵ Segunda Instancia / C03Desacato / 01PrimeraInstancia - Archivo PDF "005"

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS a fin de acatar las órdenes impartidas en la sentencia proferida, exhortándola al obedecimiento del fallo y para que diera cuenta de las razones por las cuales se ha sustraído de su acatamiento, otorgándole el término improrrogable de dos (2) para que dé cumplimiento a la orden judicial. Y, se le indicó que una vez vencido dicho plazo sin que hubiese dado cumplimiento, se requeriría al Superior Jerárquico –auto debidamente notificado⁶–.

- Con auto del **17 de abril de 2023**⁷ al no obtener respuesta por parte de la entidad ni haberse demostrado el reconocimiento y pago de la reparación administrativa ordenada en favor del señor HERNANDO URIBE MARULANTE desde la sentencia del 10 de diciembre de 2021, advirtiendo en el auto que *“ya existen dos sanciones por desacato de fechas 8 de septiembre y 10 de febrero de 2023”*, determina **requerir** a la Dra. MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ - Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas- como Superior Jerárquico, a quien se le concedió el termino de (48) horas para que ordenara el cumplimiento y abriera el correspondiente proceso disciplinario, con la advertencia de qué si en el término dado no se cumplía la orden impartida se abriría el respectivo incidente de desacato – auto notificado⁸–.

- Al no haber respuesta ni prueba de cumplimiento con providencia del **27 de abril de 2023**⁹ se ordena dar apertura al incidente en contra de la Directora de Reparaciones de la UNIDAD ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS - Doctora CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES - y de la Doctora MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARI en su carácter de Superior Jerárquico, dándose traslado nuevamente del escrito presentado por el incidentista para que en el término de tres (3) días ejercieran su derecho de defensa –notificado¹⁰–.

- Y el Juez profiere auto el **04 de mayo de 2023**¹¹ porque no se allega al expediente cumplimiento de la orden constitucional, porque si bien la Entidad remitió escrito de contestación al auto que dio apertura al incidente por desacato esgrimiendo que: *“...la sentencia proferida por el despacho fue cumplida por la Unidad para las Víctimas, toda vez que en atención a las órdenes dictadas se emitió comunicación a la parte accionante en la cual se informa que, acreditado debidamente el criterio de priorización y teniendo en cuenta que el caso se*

⁶ Segunda Instancia / C03Desacato / 01PrimeraInstancia Archivo PDF “006”

⁷ Segunda Instancia / C03Desacato / 01PrimeraInstancia Archivo PDF “007”

⁸ Segunda Instancia / C03Desacato / 01PrimeraInstancia Archivo PDF “008”

⁹ Segunda Instancia / C03Desacato / 01PrimeraInstancia Archivo PDF “009”

¹⁰ Segunda Instancia / C03Desacato / 01PrimeraInstancia Archivo PDF “010”

¹¹ Segunda Instancia / C03Desacato / 01PrimeraInstancia Archivo PDF “012”

RADICADO 05001 31 05 023 2021 00395 - 05

encuentra debidamente documentado, los recursos de la medida indemnizatoria que fueron reconocidos, serán relacionados en la ejecución de pago para el mes de Julio de 2023, cuya dispersión de recursos será el último día hábil de ese mes y su notificación en el transcurso del mes de agosto de 2023"; **a la fecha, el pago mencionado no se ha materializado**, lo que constituye un incumplimiento a la orden impartida haciendo referencia a una fecha futura y de la cual no se tiene certeza de su efectividad.

Decidió así sancionar a la Dra. **CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES** en su calidad de Directora de Reparaciones de la Unidad Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a la Dra. **MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ** en su carácter de superior jerárquico de la misma Entidad, con cuatro (04) días de arresto y cinco (05) SMLMV, auto debidamente notificado¹².

En la **respuesta** emitida por la UARIV a los requerimientos efectuados¹³ se evidencia que se solicitó **desvincular**¹⁴ a la Dra. MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ señalando que es la Directora General de la Unidad para las Víctimas y que es la Dra. **Clelia Anaya Benavides** la única competente para emitir las respuestas requeridas y el cumplimiento de las órdenes judiciales- Pero la Sala advierte que la Dra. TOBÓN YAGARÍ justamente en virtud al nombramiento realizado el 22 de agosto de 2022, tomó posesión y asumió el cargo de "DIRECTORA DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS" según el siguiente enlace: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/institucional/el-mundo-esta-mirando-si-somos-capaces-de-indemnizar-las-victimas-dijo-el-presidente>, por lo que al **ser la superior jerárquica para hacer cumplir la orden judicial** se le realizaron las notificaciones conforme a derecho y se le garantizaron los derechos fundamentales, respecto a la imposición de la sanción por no cumplimiento a providencia judicial.

Ahora bien, en la referida respuesta la UARIV anuncia que **existe cumplimiento a la sentencia** resaltando que en caso del señor HUMBERTO URIBE MARULANDA **ya se encuentra la documentación completa para su caso** e informa que la indemnización administrativa será relacionada en los procesos de cruces y trámites tendientes a que se pueda incluir en la ejecución de pago para el mes de julio de 2023, sujeto a la

¹² Segunda Instancia / C03Desacato / 01PrimeraInstancia Archivo PDF "013"

¹³ Segunda Instancia / C03Desacato / 01PrimeraInstancia Archivo PDF "011"

¹⁴ Segunda Instancia / C03Desacato / 01PrimeraInstancia Archivo PDF "011, **pág. 11**"

RADICADO 05001 31 05 023 2021 00395 - 05

aprobación de traslado de recursos, cuya dispersión de recurso sería el último día hábil de ese mes y su respectiva notificación del pago se llevará a cabo en el transcurso del mes de agosto de 2023 e indicó:

Conforme a lo antes expuesto, informamos que la entrega de los recursos de indemnización administrativa del accionante, el señor **HERNANDO URIBE MARULANDA**, quien es víctima del hecho victimizante **Homicidio de JAIRO ANTONIO URIBE MARULANDA, con criterio de priorización (ruta Prioritaria según la R5822021)**, será relacionado en los procesos de cruces y trámites tendientes a que se pueda incluir en la ejecución de pago para el mes de **Julio 2023**, sujeta a la aprobación de traslado de recursos, cuya dispersión de recursos sería el último día hábil de ese mes y su respectiva notificación del pago de la medida de indemnización se llevara a cabo en el transcurso del mes de **Agosto 2023**. En este sentido, la dirección territorial respectiva deberá notificar los oficios de indemnización a los destinatarios de la medida durante el plazo establecido, por lo cual se informó a la parte accionante que se acerque a la dirección territorial respectiva a ser notificado y posteriormente a la sucursal bancaria indicada en la carta a hacer efectivo el cobro de la medida de indemnización.

Igualmente, cuando el dinero esté disponible, procederemos a comunicarnos con el accionante con el fin de indicar el trámite correspondiente en cuanto a la entrega de cartas de indemnización y, posterior cobro de la indemnización administrativa.

Le pedimos comprender su señoría que no es posible indemnizar a todas las víctimas en el mismo momento y considerar que si bien es deseable que la indemnización por vía administrativa se entregue a todas las víctimas en el menor tiempo posible, el sistema debe administrarse de acuerdo con los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad fiscal, sin perjuicio de los derechos de las víctimas:

Pues bien, ha indicado la Corte Constitucional que dentro del incidente de desacato se indaga al obligado por el cumplimiento de la sentencia por las acciones ejercidas, por tanto, la responsabilidad exigida **es objetiva** (satisfacción plena de lo ordenado), **pero para la imposición de las sanciones por desacato, habrá de develarse la demostración de una responsabilidad subjetiva**. Al respecto son pertinentes de la sentencia **T- 271 de 2015**, así:

Asimismo, la Corte ha manifestado que la sanción que puede ser impuesta dentro del incidente de desacato tiene carácter disciplinario, dentro de los rangos de multa y arresto, resaltando que, si bien entre sus objetivos está sancionar el incumplimiento del fallo de tutela por parte de la autoridad responsable, ciertamente lo que se busca lograr es el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada y, por ende, la protección de los derechos fundamentales con ella protegidos

En el trámite del desacato siempre será necesario demostrar la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela. Sobre el particular esta Corporación ha señalado:

“30.- Así mismo, el juez de tutela al tramitar el respectivo incidente tiene el deber constitucional de indagar por la presencia de elementos que van dirigidos a demostrar la responsabilidad subjetiva de quien incurre en desacato, por tanto, dentro del proceso debe aparecer probada la negligencia de la persona que desconoció el referido fallo, lo cual conlleva a que no pueda presumirse la responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento. De acuerdo con ello, el juzgador tiene la obligación de determinar a partir de la verificación de la existencia de responsabilidad subjetiva del accionado cuál debe ser la sanción adecuada – proporcionada y razonable – a los hechos “¹⁵

31.- De acuerdo con las anteriores consideraciones se tiene que, al ser el desacato un mecanismo de coerción que surge en virtud de las facultades

¹⁵ T- 1115 de 2005

disciplinaria de los jueces a partir de las cuales pueden imponer sanciones consistentes en multas o arresto, éstas tienen que seguir los principios del derecho sancionador. En este orden de ideas, siempre será necesario demostrar que el incumplimiento de la orden fue producto de la existencia de responsabilidad subjetiva por parte del accionado, es decir, debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, quedando eliminada la presunción de la responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento.

32.- En este punto cabe recordar que, la mera adecuación de la conducta del accionado con base en la simple y elemental relación de causalidad material conlleva a la utilización del concepto de responsabilidad objetiva, la cual está prohibida por la Constitución y la Ley en materia sancionatoria. Esto quiere decir que entre el comportamiento del demandado y el resultado siempre debe mediar un nexo causal sustentado en la culpa o el dolo."¹⁶ (Subrayas fuera de texto).

En consonancia con lo anterior, la Corte ha precisado que en el momento de analizar si existió o no desacato deben tenerse en cuenta situaciones especiales que pueden constituir causales exonerativas de responsabilidad aclarando que no puede imponerse sanción cuando: "(i) la orden impartida por el juez de tutela no ha sido precisa -porque no se determinó quien debe cumplirla o su contenido es difuso y, (ii) cuando el obligado de buena fe quiere cumplir la orden pero no se le ha dado la oportunidad de hacerlo (sentencias T-1113 y T-368 de 2005)"

Es así como como **el elemento subjetivo** se refiere a un **obrar negligente del funcionario encargado de dar cumplimiento a la orden de tutela**, por ello es necesario, además de identificar el sujeto destinatario de la orden de tutela, **analizar cuál ha sido la conducta tendiente a su satisfacción** en los mismos términos que fue declarada por el Juez. Y en cuanto a la imposición de la sanción, en sentencia **C- 092 de 1997** se estableció que ella es un reflejo del poder administrativo disciplinario del juez de tutela que persigue el cumplimiento efectivo y oportuno de las órdenes de tutela, así indicó:

"... puede concluirse que la sanción por el desacato a las órdenes dadas por el juez de tutela es una sanción que se inscribe dentro de los poderes disciplinarios del juez, pues su objetivo es el de lograr la eficacia de las órdenes proferidas tendentes a proteger el derecho fundamental reclamado por el actor"

Y en lo referente a la elección y cuantificación de la sanción, debe verificarse que esta sea justa, equitativa y adecuada al propósito dispuesto, toda vez que la sanción será legítima en la medida que sea proporcionada y necesaria para salvaguardar derechos fundamentales. Es por ello que, el juez al momento de tasar la medida correccional debe moverse dentro los rangos legales,

¹⁶ T – 171 de 2009

¹⁷ T- 171 de 2009

atendiendo a criterios de razonabilidad y aplicando las reglas de la experiencia, para que la sanción a imponer no resulte desproporcional a la actitud del funcionario incumplido. (ver sentencia T- 512 de 2011 de la Corte Constitucional).

Verificado entonces por esta Sala el respeto del procedimiento previo en este trámite conforme lo previsto en el Decreto 2591 de 1991 y en los precedentes constitucionales sobre la materia, se concluye que la omisión que se endilga a las sancionadas por el incumplimiento de la orden de tutela **del 10 de diciembre de 2021** es un hecho cierto pues la orden impartida **no ha sido satisfecha**, es claro que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y LA REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –UARIV- no ha efectuado el reconocimiento y pago de la indemnización administrativa a que tiene derecho el señor HERNÁN URIBE MARULANDA. La sanción impuesta a las Doctoras **CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES** en su calidad de Directora Técnica de Reparación de Antioquia Unidad Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y **MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ** como de superior jerárquico con cuatro (04) días de arresto y cinco (05) SMLMV se encuentra dentro de los rangos establecidos en el Decreto 2591 de 1991, resultando además legítima en la medida que es proporcionada, equitativa y necesaria para salvaguardar los derechos fundamentales del accionante y se sustenta en el obrar negligente de las funcionarias encargadas de dar cumplimiento a la orden constitucional emitida por esta Sala que ha sido abiertamente desconocida.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **RESUELVE:**

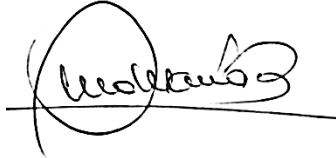
CONFIRMAR la sanción impuesta a la Dra. **CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES** en su calidad de DIRECTORA TÉCNICA DE REPARACIÓN DE ANTIOQUIA UNIDAD ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS y a la Dra. **MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ** en su carácter de DIRECTORA DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, con cuatro (04) días de arresto y cinco (05) SMLMV por incumplir la orden impartida mediante sentencia del **10 de diciembre de 2021**.

RADICADO 05001 31 05 023 2021 00395 - 05

Notifíquese lo decidido a las partes y a la señora Procuradora Regional.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Las Magistradas,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE
(Sin firma – ausencia justificada)

MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó
por **estados N ° 085** del 19 de MAYO de
2023.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>